

TUTELA NO. 2025-036.

ACCIONANTE: GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA EN CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.

ACCIONADA: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, Y MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL**



**JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO**

Bogotá D.C, marzo catorce (14) de dos mil veinticinco (2025)

ASUNTO POR RESOLVER

Procede el Despacho en primera instancia a resolver, la **ACCIÓN DE TUTELA** interpuesta por el profesional del derecho **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA EN CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, contra el **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**, alegando la presunta vulneración a su derecho fundamental de petición.

SINOPSIS FÁCTICA

En su escrito de tutela la parte accionante manifiesta que, el 3 de enero de 2025 se elevó petición respetuosa ante el ministerio de vivienda en los siguientes términos:

PETICIÓN.

Solicito respetuosamente se remita con destino al suscrito los expedientes digitales completos y actualizados de los procesos de cobro coactivo N°004 de 2022 y 026 de 2022, así como los que se encuentren vigentes y que fueron abiertos en virtud de las resoluciones 0122 del 26 de febrero de 2018, 0152 del 02 de marzo de 2018 y 1714 del 08 de julio de 2021; toda vez que no se han notificado actuaciones adicionales a las conocidas desde el mes de julio del 2024 en donde se envió el último acceso al expediente.

Se solicitó el expediente completo y actualizado (es decir con actos, constancias de ejecutoria, notificaciones, autos, actos administrativos, entre otros documentos), de los siguientes procesos de cobro coactivo:

- Proceso de cobro coactivo 004 de 2022, cuyo título ejecutivo es la Resolución No. 0152 de fecha marzo 2 de 2018, "Por medio de la cual se declara un incumplimiento al PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE MUNICIPIO DE GIRARDOT, ubicado en el Municipio de Girardot, Departamento de Cundinamarca".

- Proceso de cobro coactivo 026 de 2022, cuyo título ejecutivo es la Resolución 0831 del 30 de mayo de 2018 "Por medio de la cual se declara un incumplimiento al URBANIZACIÓN JOAQUÍN ANAYA, ubicado en el municipio de Chiboló, departamento del Magdalena"

También se solicitó la información relacionada con los procesos de cobro coactivo que se fundamentan en las resoluciones 0122 del 26 de febrero de 2018, 0152 del 02 de marzo de 2018 y 1714 del 08 de julio de 2021; señala que, el 26 de febrero de 2018 se profirió la resolución N°0122 "Por medio de la cual se declara un incumplimiento al PROYECTO HABITAD SALUDABLE GIRARDOT, en el Municipio de Girardot departamento de Cundinamarca"; Posteriormente, el 02 de marzo de 2018 se profirió la resolución N°0152 "Por medio de la cual se declara un incumplimiento al PROYECTO HABITAD SALUDABLE GIRARDOT, en el Municipio de Girardot-departamento de Cundinamarca"; finalmente, el 08 de julio de 2021 se profirió la resolución N°1714 "Por medio de la cual se resuelve el recurso de

reposición interpuesto , contra la Resolución N°0152 del 02 de marzo de 2018”; Es decir, las resoluciones 0152 del 02 de marzo de 2018 y 1714 del 08 de julio de 2021, corresponden al mismo proceso de cobro coactivo que sería el 004 de 2022.

El MINISTERIO DE VIVIENDA – FONVIVIENDA dio respuesta a la petición incoada, en los siguientes términos:

Cordial saludo,

Doctora Palacio, reciba un cordial saludo de la Oficina Asesora Jurídica.

En atención a la petición del asunto, en la que en su calidad de apoderado de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C, solicita ***"(...) se remita con destino al suscrito los expedientes digitales completos y actualizados de los procesos de cobro coactivo N°004 de 2022 y 026 de 2022 (...)"***, comedidamente nos permitimos adjuntar link de acceso a expedientes digitales, de los procesos administrativos de cobro coactivo requeridos:

[21. GIRARDOT RES 0152](#)

[14. CHIBOLO](#)

En los anteriores términos, damos respuesta de fondo a su solicitud.

El MINISTERIO DE VIVIENDA – FONVIVIENDA solamente aportó los expedientes de cobro coactivo de los trámites identificados con los números 004 y 026 de 2022, omitiendo por completo manifestarse en relación con el proceso de cobro coactivo que se asocia a la Resolución N°0122 del 26 de febrero de 2018 “Por medio de la cual se declara un incumplimiento al PROYECTO HABITAD SALUDABLE GIRARDOT, en el Municipio de Girardot-departamento de Cundinamarca”, el cual corresponde al proceso de cobro coactivo 011 de 2022.

Al realizar una revisión cuidadosa de los expedientes trasladados por el MINISTERIO DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, se observó lo siguiente:

- El acceso al expediente brindado sobre el caso 1 “Cobro coactivo N. 004 de 2022”, permite concluir que el expediente se encuentra incompleto, pues faltan los documentos de los numerales 8, 9, 10, 11, 15. Así mismo, no se observan las constancias de notificación a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA de la resolución N. 1714 del 8 de julio de 2021, la cual resolvió recurso de reposición a la resolución N. 0152 del 2018. No se observa el memorial radicado por el municipio proponiendo la reposición. No se observa radicación de recurso por parte de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA tampoco. No se observa notificación del mandamiento de pago a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, entre otros documentos faltantes.
- El acceso al expediente brindado sobre el caso 2 “Cobro coactivo N. 026 de 2022”, cuenta con documentos numerados como 17 y 17.1, los cuales hacen parte del proceso de Cobro Coactivo N. 011 del 2024, en donde se resuelven excepciones contra el mandamiento de pago, presentadas por el municipio de Girardot, pero estos documentos hacen parte de otro proceso. En conclusión, las actuaciones que registran en el expediente están mezcladas.

Advierte que, es claro que: (i) No se entregó el expediente del proceso de cobro coactivo 011 de 2022 o de cualquier otro que se encontrara en curso en relación con la Resolución N°0122 del 26 de febrero de 2018; (ii) No se entregaron de forma completa y organizada los expedientes correspondientes a los procesos de cobro coactivo 004 de 2022 y 026 de 2022, pues de conformidad con la misma numeración del Ministerio, es claro que faltan piezas, así mismo se omitió por completo la entrega de constancias de ejecutoria y de notificación de cada uno de los actos y documentos obrantes en los expedientes.

PRETENSIONES

La parte accionante con su acción de tutela pretende:

“PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de petición que ha sido vulnerado por el accionado a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., conforme ha sido expuesto en este escrito.

SEGUNDO: Ordenar a la accionada que en el término improrrogable de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, posteriores a la notificación del fallo, se emita y notifique respuesta de fondo a la petición incoada el 3 de enero de 2025 por mi representada, entregando la totalidad de la información deprecada, particularmente en lo al proceso de cobro coactivo 011 de 2022 o cualquier otro que se hubiera iniciado en relación con la Resolución N°0122 del 26 de febrero de 2018, así como los documentos faltantes y las constancias de ejecutoria y notificación de cada una de las actuaciones de los procesos de cobro coactivo 004 y 026 de 2022.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La parte convocante fundamenta sus pretensiones en el artículo 23 y 86 de la Constitución Política; y artículo 32 de la Ley 1755 de 2015.

ACTUACIÓN PROCEDIMENTAL

Mediante auto del 3 de marzo de 2025, el Despacho avocó conocimiento y admitió la acción de tutela interpuesta por el señor interpuesta por el profesional del derecho **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA EN CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, contra el **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**, en la misma fecha se ofició a la accionada para que en ejercicio de su poder de contradicción se pronunciara respecto de lo solicitado por la parte accionante.

La apoderada del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA en su contestación manifiesta que, es cierto lo manifestado por el apoderado de la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. en lo que respecta a haber radicado petición ante esta entidad, solicitando el acceso a expedientes digitales; dicho documento fue registrado con el radicado 2025ER0000363 y contestado con radicado 2025EE0001600; a manera de alcance se ha expedido el documento 2025EE0006848 ampliando la respuesta a la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. y notificada al correo notificaciones@gha.com.co; ante estas consideraciones solicita declarar improcedente la acción de tutela, al presentarse un hecho superado.

La apoderada judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dando alcance al presente trámite señala que, es cierto lo manifestado por el apoderado de la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. en lo que respecta a haber radicado petición ante esta entidad, solicitando el acceso a expedientes digitales; dicho documento fue registrado con el radicado 2025ER0000363 y contestado con radicado 2025EE0001600; en la respuesta se dio acceso a los expedientes en los links que se visualizan en el documento; ahora bien, si no fue posible acceder a algún documento, pudo obedecer a una falla técnica presentada al momento de la descarga del documento, empero el accionante nunca lo reportó, debió solicitar entonces los documentos que necesitaba o manifestar que no fue posible acceder a ellos; no obstante en ningún momento se ha negado acceso a los expedientes, por lo tanto, no existe vulneración al derecho de petición.

PRUEBAS

Se tuvo como prueba de **la parte actora**: i) Derecho de petición incoado el 3 de enero de 2025 ante el MINISTERIO DE VIVIENDA CUIDADO Y TERRITORIO -

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA (FONVIVIENDA); ii) Respuesta derecho de Petición radicación interna 2025ER0000363 - Solicitud acceso a expedientes digitales procesos administrativos de cobro coactivo N°004 de 2022 y No. 0026 de 2022.

Por la **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA**:- i) Oficio de respuesta 2025EE0001600; y, ii) Alcance a respuesta 2025EE0006848.

Las allegadas por **Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio**: i) Oficio de respuesta 2025EE0001600.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El artículo 86 de la Carta Fundamental en relación con el punto preceptúa:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar antes los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...)”

La anterior disposición fue reglamentada por el artículo 10 del Decreto 2591, en los siguientes términos:

“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”

En el caso bajo estudio corresponde entonces al Despacho determinar si: ¿Puede afirmarse que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, cuando se extinguen las razones por las cuales se solicita la protección de los derechos cuyo amparo se pretende?

LA ACCIÓN DE TUTELA

En cuanto al núcleo esencial del derecho fundamental de petición, ha señalado la H. Corte Constitucional, que se basa en la resolución pronta, oportuna y de fondo de lo solicitado, veamos:

“a) El derecho de petición es fundamental.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la petición.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular

deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación.

g) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

h) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta”.

...

Por lo demás, como quiera que el núcleo esencial del derecho de petición y, por lo mismo, su satisfacción, radica en que la solicitud sea resuelta de manera pronta y oportuna, cuando se solicite un comportamiento específico de la autoridad correspondiente, el derecho solo queda satisfecho cuando tal actuación sea efectivamente materializada. Un ejemplo de lo anterior fue expuesto en la referida sentencia T-1124 de 2005, donde se indicó, en relación con la expedición de copias de actuaciones judiciales, que “(...) no resulta razonable sostener que la solicitud de expedición de copias auténticas resulta satisfecha simplemente con el auto del funcionario judicial, por cuanto el derecho que otorga el ordenamiento legal no sólo se orienta a la mera solicitud de los documentos sino a obtener su “expedición y entrega”. Así, solamente hasta que se haya entregado la copia solicitada se protege de forma material este derecho, que encuentra su garantía constitucional en el debido proceso”.¹ (Subraya y negrilla fuera del texto original)

En relación con el derecho de petición, la Constitución Política, en su artículo 23 prevé que:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

A su vez la Ley 1755 de 2015, previo el término legal para resolver solicitudes, así:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”

La acción de Tutela fue consagrada como un mecanismo para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por las acciones u omisiones de las

¹ H. CORTE CONSTITUCIONAL. REFERENCIA: EXPEDIENTE T-2.931.735. MAGISTRADO PONENTE: JUAN CARLOS HENAO PÉREZ. COLABORÓ: JAVIER FRANCISCO ARENAS FERRO. BOGOTÁ, D.C., DIECISIETE (17) DE MAYO DE DOS MIL ONCE (2011).

autoridades públicas, o por particulares, en los casos expresamente señalados en la ley.

En virtud de lo anterior, para que sea procedente este mecanismo constitucional, se debe presentar una amenaza o vulneración real de los derechos fundamentales inherentes al ser humano, para que el fallo que ordene la acción tutela, se garantice la protección de los mismos, en esta medida cuando el Juez Constitucional encuentra que la situación que puso en riesgo los derechos fundamentales del tutelante ha cesado o fue corregida, no es procedente efectuar un pronunciamiento de fondo al respecto.

Sobre este tema la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:

“El hecho superado se presenta cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se encuentra satisfecho y, por consiguiente, la afectación o amenaza de los derechos fundamentales invocados ya no existe cuando el juez constitucional va a proferir su decisión, pues bajo este escenario cualquier decisión u orden que pudiese adoptar el juez resultaría van. De ser este el caso, no se requiere que en la sentencia se realice un análisis sobre la vulneración de los derechos invocados, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, ya sea para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”²

Así pues, es claro entonces que, en el evento que el suceso que dio origen a la trasgresión fenece, lo mismo ocurre con la esencia de la acción de tutela, configurándose entonces el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, razón por la cual realizar un estudio de fondo al caso en concreto no resulta procedente.

En este sentido el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, ha señalado los eventos en los cuales se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, veamos:

“En reiteradas ocasiones, esta corporación ha señalado que la carencia actual de objeto se configura cuando la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno o “caería al vacío”, y que dicho fenómeno puede presentarse bajo las categorías de hecho superado, daño consumado o el acaecimiento de alguna otra circunstancia que conduzca a que la vulneración alegada ya no tenga lugar siempre que esta no tenga origen en la actuación de la entidad accionada (situación sobreviniente).

32. En relación con la primera categoría (carencia actual de objeto por hecho superado, en adelante, “hecho superado”), el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 determina lo siguiente: “Artículo 26 Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

33. La Corte ha interpretado la disposición precitada en el sentido de que el hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la vulneración o amenaza al derecho fundamental invocado. Concretamente, la hipótesis del hecho superado se configura “cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo de la misma, se satisface por completo la pretensión contenida en la acción de tutela, es decir, que **por razones ajenas a la intervención del juez constitucional**, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario” (resaltado fuera del texto).

² H. CORTE CONSTITUCIONAL.SENTENCIA T-361 DE 2020.REFERENCIA: EXPEDIENTE T- 6.666.413. MAGISTRADO PONENTE: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. BOGOTÁ, D.C., TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE (2020).

34. En tal sentido, esta corporación ha señalado los aspectos que deben verificarse a fin de examinar y establecer la configuración del hecho superado desde el punto de vista fáctico. Estos aspectos son los siguientes“(i) que efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu proprio, es decir, voluntariamente”.³

De la documental allegada a las diligencias se determina que, en el caso sub lite el día 3 de enero de 2025, el profesional del derecho GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA obrando como apoderado de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C, solicitó ante el MINISTERIO DE VIVIENDA CUIDADO Y TERRITORIO, y el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA (FONVIVIENDA), le fueran remitidos de manera íntegra los expedientes de los procesos de cobro coactivo N°004 de 2022 y 026 de 2022, así como los que se encuentren vigentes y que fueron abiertos en virtud de las resoluciones 0122 del 26 de febrero de 2018, 0152 del 02 de marzo de 2018 y 1714 del 08 de julio de 2021.

El día 29 de enero de 2025, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dio respuesta a dicha solicitud dando acceso a los expedientes digitales de los procesos administrativos de cobro coactivo N°004 de 2022 y No. 0026 de 2022; no obstante, el accionante en su escrito de tutela afirmó que, respecto del proceso N°004 de 2022 los archivos se encontraban incompletos, pues no encontró los documentos enumerados 8, 9, 10, 11 y 15, y tampoco las constancias de notificación a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA de la resolución No. 1714 del 8 de julio de 2021, la cual resolvió recurso de reposición a la resolución No. 0152 del 2018; frente al proceso N. 026 de 2022 se encontraron los documentos 17 y 1701 que no corresponden a dicha actuación; y finalmente refiere que, las accionadas omitieron manifestarse en relación con el proceso de cobro coactivo que se asocia a la resolución N°0122 del 26 de febrero de 2018, el cual corresponde aparentemente al proceso de cobro coactivo 011 de 2022.

Dicho lo anterior se encuentra acreditado que, dentro del trámite de la acción de tutela, precisamente el día el día 6 de marzo del cursante, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dio respuesta al requerimiento que motivó la presente acción de tutela, refiriéndole al accionante que, se estaría complementado la información suministrada en pretérita oportunidad, aclarando que, en ejercicio de su competencia, inició el proceso administrativo de cobro coactivo 004 de 2022 contra el municipio de Girardot con base en el título ejecutivo contenido en las resoluciones 0152 del 02 de marzo de 2018 y 1714 del 08 de julio de 2021, que hacen referencia a la declaración de incumplimiento del proyecto VIVIENDA SALUDABLE municipio de Girardot, por valor de (\$10.770.572) pesos, correspondiente a (17) subsidios de vivienda no legalizados.

Igualmente, la OAJ del MVCT, en ejercicio de su competencia, inició el proceso de cobro coactivo 011 de 2022 contra el municipio de Girardot, con base en el título ejecutivo en la resolución 0122 del 26 febrero de 2018, que hace referencia a la declaración de incumplimiento al proyecto HABITAD SALUDABLE GIRARDOT, por valor de (\$23.717.562), correspondiente a ocho subsidios de vivienda no legalizados.

Asegurando que, actualmente, en la OAJ del MVCT no obran más procesos contra el municipio de Girardot, anexando los links de acceso a los expedientes relacionados:

 [21. GIRARDOT RES 0152 - copia](#)

 [22. GIRARDOT RES 0122](#)

³H. CORTE CONSTITUCIONAL.REFERENCIA: EXPEDIENTES T-7.301.069 (AC). MAGISTRADO PONENTE. ALEJANDRO LINARES CANTILLO.BOGOTÁ D.C., DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL VEINTE (2020).

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S certifica que ha realizado por encargo de MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO identificado(a) con NIT 900463725 el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Remitente - Destinatario. Acreditado por el organismo nacional de acreditación (ONAC) con el código 16-ECD-004.

Según lo consignado en los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

| | |
|----------------------|--|
| Id mensaje: | 11407 |
| Remitente: | minvivienda@gov.co |
| Cuenta Remitente: | correocertificadonotificaciones@4-72.com.co |
| Destinatario: | notificaciones@gha.com.co - Bogotá D.C. Doctor GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA Aseguradora Solidaria de Colombia E.C |
| Asunto: | Respuesta electrónica 2025EE0006848 |
| Fecha envío: | 2025-03-06 08:47 |
| Documentos Adjuntos: | Si |
| Estado actual: | Lectura del mensaje |

Revisado el contenido de cada una de las carpetas se observa que, frente al proceso administrativo de cobro coactivo 004 de 2022, si se encuentran los archivos enumerados 8, 9, 10, 11 y 15, así como la constancia de notificación de la Resolución No. 1714 del 8 de julio de 2021 como archivo No. 5.

En lo que tiene que ver con el proceso cobro coactivo 011 de 2022 se observan 9.7 archivos dentro de la carpeta denominada 22. Girardot Res 0122; y finalmente respecto del proceso 026 de 2022 se ingresó al link de la respuesta otorgada el 29 de enero de 2025, correspondiente a la carpeta denominada 14.CHIBOLO encontrando que, la misma posee 9.4 carpetas.

Con fundamento en lo anterior, y una vez realizado el análisis por el Despacho y la Jurisprudencia antes transcrita, se encuentra acreditado que, en efecto existe un pronunciamiento en relación con lo requerido por el actor, además debe tenerse en cuenta que, la contestación de una petición presentada ante una autoridad debe ser pronta, oportuna y de fondo; no obstante, no requiere que la misma resulte favorable o acceda a las pretensiones del peticionario, pues se difiere entre el derecho de petición propiamente dicho y el derecho a lo pedido.

Respecto de lo anterior la Honorable Corte Constitucional, se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Ahora bien, la obligación de resolver de fondo una solicitud no significa que la respuesta sea aquiescente con lo solicitado, sino el respeto por el ejercicio del derecho fundamental de petición, es decir, se debe emitir una respuesta clara, precisa, congruente, de fondo, sin que ello signifique necesariamente acceder a lo pretendido. Debe recordarse que es diferente el derecho de petición al derecho a lo pedido: “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta. No se decide propiamente sobre él...”⁴

Así pues, la Honorable Corte Constitucional ha sido enfática en indicar que, la satisfacción del derecho de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, pues la contestación a una petición incluso si la respuesta es negativa significa que la autoridad dio alcance a la petición elevada, denotándose la diferencia del derecho de petición y derecho a lo pedido, pues el ámbito de protección del derecho fundamental de petición trae consigo el derecho a presentar una solicitud y tener una contestación clara, de fondo, suficiente, efectiva y congruente, sin implicar que la misma otorgue lo pedido; claro lo anterior, se tiene

⁴ H. CORTE CONSTITUCIONAL.SENTENCIA T-058/18 REFERENCIA: EXPEDIENTE T-6.418. 361.MAGISTRADO SUSTANCIADOR: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO.BOGOTÁ, D.C., VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).

que, la vulneración al derecho de petición cuya protección se pretendía cesó; y, en consecuencia, nos encontramos frente a un hecho superado, que determina la carencia de objeto para pronunciarse sobre el asunto bajo estudio, por lo que así se declarará en el fallo.

Finalmente se tiene entonces que, en efecto si existió un pronunciamiento respecto de la solicitud del accionante del día 3 de enero de 2025; siendo claro que, en el evento que el suceso que dio origen a la trasgresión fenece, lo mismo ocurre con la esencia de la acción de tutela, configurándose entonces el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, razón por la cual realizar un estudio de fondo al caso en concreto no resulta procedente.

Entonces, la vulneración al derecho fundamental de petición cuya protección se pretendía cesó; y, en consecuencia, nos encontramos frente a un hecho superado, que determina la carencia de objeto para pronunciarse sobre el asunto bajo estudio, por lo que así se declarará en el fallo.

No obstante, a lo anterior, el Despacho insta a la demandada para que, en lo sucesivo, no se mantenga a la espera de que sus usuarios quienes buscan un pronunciamiento de su parte tengan que recurrir a acciones como la que ahora nos ocupa, para obtener respuesta a las solicitudes por ellos elevadas.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho superado, en la Acción de Tutela impetrada por el señor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA EN CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, contra el **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**, alegando la presunta vulneración del derecho fundamental de petición.

SEGUNDO: Comuníquese esta determinación a los interesados conforme al artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, envíense las presentes diligencias ante la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

El Juez,

HYMAN ALBERTO HERMOSILLA REYES

